

Paridad de género y régimen electoral en clave de gobernanza **Gender parity and the electoral regime in governance key**

Mtra. Griselda Beatriz Rangel Juárez
Consejera Electoral del IEPC Jalisco
Maestra en Derecho por la UNAM
beatriz.rangel@iepcjalisco.org.mx

Resumen

Desde la perspectiva del análisis sistémico que ofrece la gobernanza electoral se examina el conjunto de instituciones y disposiciones establecidas en el régimen electoral mexicano para el ejercicio, promoción y tutela de los derechos políticos de las mujeres a votar y ser votadas en las elecciones y sus resultados, a partir de que se les reconoce como ciudadanas y hasta la reforma 2014 en que se establece la paridad electoral.

Palabras clave

Género, elecciones, paridad, gobernanza, democracia.

Abstract

The set of institutions and provisions established by the Mexican electoral system for the exercise, promotion and protection of the political women rights to vote and to be voted in elections are analyzed through the systemic theoretical frame provided by electoral governance. The study goes from 1953 when they were recognized as citizens until 2014 electoral parity reform.

Key words

Gender parity, elections, governance, democracy.

INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva del análisis sistémico que nos ofrece la gobernanza electoral, se examina el conjunto de instituciones y disposiciones establecidas en el régimen electoral mexicano para el ejercicio, promoción y tutela de los derechos políticos de las mujeres a votar y ser votadas en las elecciones y sus resultados, a partir de que se les reconoce como ciudadanas.

Según Mozaffar y Schedler (2002), la gobernanza electoral se refiere a un aspecto del análisis de los procesos del desarrollo político de un país que hasta el año 2000 no se consideraba relevante y tiene que ver nada menos que con la forma en que trabajan las instituciones en funciones materialmente electorales (Congresos) y las propiamente electorales (organismos y tribunales electorales).

Por su parte, Medina (2016) refiere que más allá del papel de las instituciones electorales del orden nacional la gobernanza electoral se ha extendido a instancias del orden internacional para la aplicación del marco de convencionalidad en materia política y electoral, como la Comisión y la Corte Internacional de Derechos Humanos, respectivamente, con lo que se cierra el ciclo para abrirse otro ante una nueva reforma.

Como se ha señalado, este trabajo revisa las reformas aprobadas desde 1953 hasta la más reciente del año 2014, con el propósito de examinar las transformaciones del régimen electoral para garantizar la incorporación de las mujeres como sujetas de derechos político electorales en México y cómo esto se ha reflejado en la representación alcanzada a lo largo de las poco más de seis décadas transcurridas.

Se parte de la premisa de un régimen autoritario en su implantación inicial y de qué manera se fueron reflejando avances paulatinos a lo largo de las reformas de la transición a la democracia hasta la reforma del año 2014, en la que se consolidan enclaves democráticos sólidos al hacer posible una tutela cada vez más eficaz de los derechos político-electorales de las mujeres, sin soslayar que subsisten auténticos retos, como la legislación en materia de paridad vertical y horizontal en los municipios a nivel constitucional y en materia penal electoral para prevenir, combatir y sancionar la violencia política de género.

PLANTEAMIENTO TEÓRICO

La gobernanza describe, a partir de la crisis de los gobiernos democráticos que refieren un Estado adelgazado frente al mercado y una sociedad civil con participación creciente durante el siglo XX, el arribo necesario de los gobiernos a una forma de gobernar asociativa e interdependiente con la sociedad, vinculada con grupos y actores sociales, para la definición de la agenda gubernamental y sus objetivos, la decisión sobre las modalidades de realización de las acciones idóneas subsecuentes y su ejecución; así como, las normas y los recursos que el proceso demanda (Del Campo, 2007; Aguilar, 2016). Mediante este enfoque, se vuelve de interés el análisis de los “hechos o situaciones que dificultan o impiden la acción directiva del gobierno democrático y, con base en el conocimiento, proponer medidas para mejorar su efectividad y calidad institucional” (Aguilar, 2016: 29).

Al hablar de gobernanza en términos de respuesta a la insuficiencia como hace Aguilar (2016) (porque “la dirección de la sociedad no puede efectuarse ni ser eficaz sólo mediante la acción exclusiva o unilateral del gobierno, sólo con el empleo de sus propias facultades, poderes, atributos, equipos, recursos” –p. 61) y de un concepto descentralizado de la dirección social (“la sociedad ya no puede ser dirigida/controlada desde el ápice y por un agente todopoderoso [...] sino que los instrumentos de control, de opinión y de conocimiento están dispersos y distribuidos entre la multiplicidad de actores”, Del Campo, 2007: s.p.) se reconoce la necesaria apertura del gobierno a la actuación de colectivos, grupos, sectores diversos en su quehacer y a transformaciones en lo organizativo y administrativo dado que “su patrón directivo unilateral, vertical, jerárquico, de mando es improductivo y hasta inviable” (Aguilar, 2016: 63) en el complejo contexto contemporáneo.

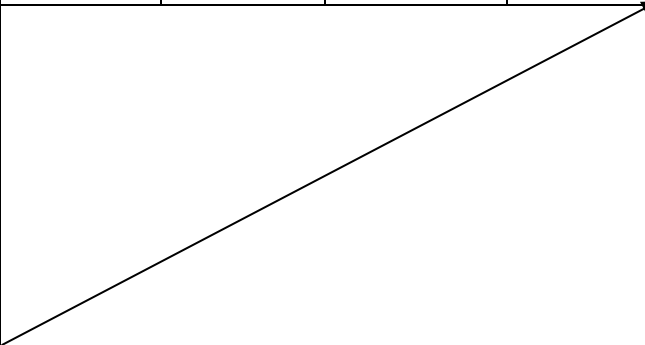
En ese sentido, la gobernanza puede definirse en primer lugar como un proceso que hace referencia a la acción del gobierno y delimita su ejercicio a la vez que reconoce “la presencia e intervención indispensable de otros actores en la definición de los objetivos generales y en su logro” (Del Campo, 2007).

Con una visión cercana, Medina (2016) aplica en su definición complejizada de gobernanza electoral el juego interrelacionado de algunos de los elementos referidos (actores, reglas, procesos, procedimientos y acciones) acotando el marco a comicios competitivos.

La propuesta metodológica de este autor sugiere analizar ese intercambio mediante las categorías de actores, sistema de reglas, órdenes gubernamentales, y órganos electorales, que se ponen a revisión en los niveles de diseño de las reglas (lo legislativo), su aplicación (lo administrativo), la resolución de disputas (lo jurisdiccional) y la revisión regional de decisiones o control de convencionalidad (lo internacional).

Ello también supone entender la gobernanza electoral como un ciclo (Medina, 2016 y Gilas, 2016) que inicia en la definición normativa del marco electoral de acción para después aplicarse y cerrar en la resolución de disputas o hasta la revisión regional/internacional¹ (según sea el caso); el ciclo se reabrirá otra vez cuando se plantea un nuevo diseño de reglas.

Cuadro 1. Categorías y niveles del análisis de gobernanza (Medina, 2016)

Gobernanza	Diseño de reglas	Aplicación de reglas	Resolución de disputas	Revisión regional de decisiones
Actores				
Sistema de reglas				
Órdenes gubernamentales				
Órganos electorales				

En este ámbito particular, el electoral, la nueva gobernanza se comprende, como plantea Del Campo (2007), sólo en democracia; por tanto, supone además de garantizar la incidencia social en las decisiones, adoptar un carácter altamente inclusivo, de ahí que entre la diversidad de actores que el proceso requiere incorporar de forma plena están las mujeres y sus demandas de acceso a la toma pública de decisiones y representación paritaria.

¹ Desde 2012, las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos son consideradas de obligación para el Estado mexicano (Medina, 2016: 20).

Aquí se propone realizar el análisis, mediante ese ciclo de gobernanza en fases, a propósito de la inclusión de las mujeres y las respuestas dadas -a través de las reformas electorales, su aplicación y adjudicación- a las demandas sociales para su incorporación en los procesos electorales y su representación creciente.

Este análisis necesariamente debe partir por lo menos de la reforma de origen que da cuenta del reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres.

Con base en ese marco, es posible determinar que existen cinco grandes momentos de la presencia de las mujeres en las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, que son los siguientes: el primero va desde las legislaturas de 1955 a 1970 en que el número de diputadas fue en promedio menor a 5 por ciento; el periodo de 1971 a 1989, en que el promedio fue apenas de 10 por ciento, constituiría el segundo; la década de los noventa, que culminó en el año 2000 con la alternancia en la Presidencia de la República, y en la que la participación de las mujeres estuvo en 16 por ciento, es el tercer momento; de 2003 a 2012, cuando gracias a las llamadas cuotas de género se alcanzó una masa crítica importante con el 37 por ciento, se trata del cuarto; y, finalmente, el quinto momento se observa a partir de 2014, cuando, con la paridad de género en candidaturas, se logró un 42.6 por ciento de escaños congresuales.

Cuadro 2. Participación de las mujeres en la Cámara de Diputados de 1952 a 2015

Elección	Legislatura	Núm. total Cámara	Diputadas	Porcentaje de diputadas sobre total de escaños
1955	XLII	161	1	.62
1958	XLIII	162	4	2.46
1961	XLIV	162	8	4.93
1964	XLV	178	9	5.05
1967	XLVI	210	13	6.19
1970	XLVII	212	12	5.66
1973	XLVIII	123	14	6.57
1976	XLIX	231	19	8.20
1979	L	237	23	9.70
1982	LI	400	36	9.00
1985	LII	400	46	11.50
1988	LIII	400	42	10.50
1991	LIV	500	60	12.00
1994	LV	500	42	8.40
1997	LVI	500	70	14.00
2000	LVII	500	87	17.40
2003	LVIII	500	84	16.80

2006	LIX	500	115	23.00
2009	LX	500	117	23.4
2012	LXI	500	185	37.0
2015	LXII	500	213	42.6

Fuentes: Zaremberg (2010), Peschard (2003) y Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales, INE.

El acceso de las mujeres al Senado resultó aún más desafiante por la naturaleza del encargo y el hecho de que su renovación es sexenal. En este caso, las primeras mujeres no llegaron ahí sino hasta 1964, 11 años después de la promulgación de la reforma que posibilitaba su acceso. Sin embargo su arribo no significó su ascenso creciente, más bien se mantuvo estancado, con dos asientos, desde entonces hasta 1982, y solo a partir de ese momento se elevó para llegar a 49 espacios (38%) en el año 2012.

Cuadro 3. Participación de las mujeres en la Cámara de Senadores de 1964 a 2012

Elección	Legislatura	Núm. total Senado	Senadoras	Porcentaje de senadoras sobre total de escaños
1964 – 1970	XLVI – XLVII	64	2	3.12
1970 – 1976	XLVIII – XLIX	64	2	3.12
1976 – 1982	L – LI	64	4	6.25
1982 – 1998	LII – LIII	64	6	9.37
1988 – 1994	LIV	64	10	15.60
	LV	64	3	4.68
1994 – 2000	LVI	128	16	12.50
	LVII	128	19	14.85
2000 – 2006	LVIII – LIX	128	24	19.00
2006 – 2012	LX – LXI	128	26	20.31
2012 – 2018	LXII	128	42	32.81

Fuente: Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales, INE.

Para efectos del análisis partimos de esos mismos cinco ciclos o momentos para caracterizar el avance de la representación política de las mujeres en los espacios de poder político del orden federal en México, aunque el Senado aún no pasa la prueba de la paridad, por lo que habrá que observar los resultados de la elección de 2018 para caracterizar mejor la quinta fase en torno a esta parte del Congreso de la Unión.

FASES ELECTORALES

- 1. Las legislaturas de 1955 a 1970

En 1947 las mujeres alcanzaron de forma parcial la ciudadanía en México a través del Decreto de adición al artículo 115 constitucional que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reconoció su derecho a participar políticamente como votantes y como candidatas pero sólo en las elecciones municipales. Fue posteriormente, apenas hace 63 años, en octubre de 1953 en México, vigésimo sexto país americano en hacerlo de forma plena, que la conquista se amplió al extenderse esa facultad de votar y ser votada ahora al ámbito federal.

El 17 de octubre de 1953, en cumplimiento a una promesa de campaña, el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma constitucional que reconocería la ciudadanía a las mujeres al reformar el artículo 34, estableciendo que el carácter de ciudadanos de la República correspondía tanto a los varones como a las mujeres que, habiendo nacido en territorio nacional, hubieran cumplido 18 años siendo casados y 21 si no y tuvieran un modo honesto de vivir, texto que después se reformaría para derogar la excepción del matrimonio.

Esa reforma tuvo efectos prácticos hasta dos años después, cuando el 3 de julio de 1955 las mujeres acudieron a ejercer su derecho para elegir los diputados federales que integrarían la XLIII Legislatura (1955-1958). De entre los resultados alcanzados, fueron electas 4 mujeres (2.5% de 162 diputaciones posibles): Remedios Albertina Ezeta, del Estado de México; Margarita García Flores, de Nuevo León; María Guadalupe Urzúa Flores, del X distrito electoral de Jalisco, y Marcelina Galindo Arce, de Chiapas.

Este número de diputadas emergió de 38 candidaturas de mujeres presentadas por los partidos registrados que representaron 5.3 por ciento del total de 715 candidaturas posibles (Zaremborg, 2010).

La aplicación de la reforma se vio afectada por obstáculos relacionados con su novedad, la cultura machista y discriminatoria hacia las mujeres que impactaba de forma directa la

posibilidad de participar en candidaturas² (Fernández, 2017) y el sistema político electoral mexicano caracterizado por el autoritarismo, la antidemocracia, la casi nula competitividad y transparencia (Méndez 2006) y un partido único de Estado, con alcance nacional en candidaturas que en esa elección federal obtuvo 90 por ciento de escaños.

De ahí que “las primeras diputadas y senadoras³ [hayan sido], por este motivo, del PRI⁴, las mujeres de los demás partidos registrados PAN, PPS, PARM y otros, aun cuando fueron propuestas no pudieron llegar” (Girón, González y Jiménez, 2008: 45).

En elecciones federales posteriores —1958, 1961 y 1964—, los porcentajes de participación de mujeres en candidaturas se mantuvieron menores a 6 por ciento: 5.6, 5.1 y 4.7 respectivamente (Zaremborg, 2010).

La reforma no implicó que las mujeres llegaran a los órganos de representación política sino paulatinamente debido a que el cambio no fue acompañado de otros mecanismos de potenciación de la participación de las mismas. De hecho, la medida fue considerada más bien una forma de ampliar la base del electorado que asistía a las urnas para votar por los candidatos de un partido controlado verticalmente por un régimen autoritario presidencialista y de partido hegemónico que anticipadamente designaba a sus candidatos y determinaba sus triunfos antes de las elecciones, con oposiciones débiles debido al recio control de la competencia por el poder.

Cualquier norma jurídica requiere tiempo para arraigarse y convertirse en una realidad efectiva, entonces como describe Peschard (2003) las propias mujeres al alcanzar la ciudadanía tardaron en dimensionar su alcance debido a su histórica marginación respecto de los asuntos públicos, razón por la cual la evolución por la apropiación efectiva del derecho a ocupar cargos públicos de elección fue más bien lenta. No obstante, el cambio empezó a surtir efectos en la cultura política y a normalizar poco a poco el hecho de que las mujeres participaran en espacios diversos.

² Se dice que “para intentar detener la presencia de las mujeres en la política formal, los hombres recurrieron a difundir rumores para desprestigiar la fama y la legitimidad de Urzúa Flores; su vida personal y amorosa se sometió a una crítica en la opinión pública” (Fernández 2017: 89-90).

³ Que hubo sólo a partir de la elección de 1958.

⁴ Al interior de ese partido la estructura jerárquica ejercía un fuerte peso sobre su sector femenino en el que sus dirigencias “eran directamente designadas por el Comité Central Ejecutivo del PRI y las delegadas de los sectores por los comités ejecutivos de los mismos” (Zaremborg, 2010: 293).

Según Julia Flores (2011), en el estudio pionero de Almond y Verba sobre cultura cívica llevado a cabo en 1959, dentro del cual uno de los países considerados fue México, se mostró la fotografía de un país de 28 millones de habitantes frente al actual que está poblado por alrededor de 120; una Ciudad de México de solo 2.5 millones y no de más de 8 que actualmente tiene, mientras que ciudades como Guadalajara y Monterrey apenas contaban con 740,739 y 723,739 respectivamente. En ese trabajo se describe a la sociedad mexicana con un sistema político y un régimen creados para una sociedad rural a punto de convertirse en urbana, alienada (los mexicanos se orientan como súbditos del sistema político), fragmentada (con tendencias de algunos a la rebelión), pasiva, parroquial, tradicionalista y centrada sobre la norma de la familia patriarcal.

En este sentido, es de advertirse que las condiciones en que esta conquista emergió al plano social, implicaron nuevos desafíos ya que las sucesivas reformas en materia política de los años siguientes hasta 1996 no habrían de volver a hacerse cargo de la participación política de las mujeres.

Como hemos advertido, la gobernanza electoral implica ciertas condiciones que en los primeros momentos de la ciudadanía femenina en México no existían, esto es no contábamos con un régimen democrático que reconociera la necesidad de establecer reglas equitativas de competencia entre los actores y fuerzas políticas ni mucho menos para impulsar medidas que nivelaran las inequidades sexogenéricas acompañando a las organizaciones que actuaban en pro de la participación política de las mujeres de aquel entonces.

De hecho, el derecho al voto de las mujeres en su doble aspecto de elegir y ser electas, se reconoce no tanto por el empuje de movimientos sufragistas liderados por mujeres como Laureana Wright, Juana Gutiérrez, Elisa Acuña, Elvia Carrillo Puerto, Hermila Galindo, Elena Torres, Adelina Zendejas, Esther Chapa, Soledad Orozco, Margarita Robles, Amalia Castillo, María Lavalle, Margarita García Flores, entre muchas otras, sino por la presión internacional.

Cuadro 4. Año de obtención del voto femenino en países americanos

PAISES*	DERECHO FEMENINO AL VOTO
Ecuador	1929
Uruguay	1932
Brasil	1933
Cuba	1934
Rep. Dominicana	1942
Jamaica	1944
Guatemala	1946
Panamá	1945
Trinidad y Tobago	1946
Argentina	1947
Venezuela	1947
Aruba	1948
Surinam	1948
Chile	1949
Costa Rica	1949
El Salvador	1950
Haití	1950
Antigua y Barbuda	1951
Dominica	1951
Granada	1951
San Vicente y Las Granadinas	1951
Santa Lucía	1951
Bolivia	1952
San Kitts y Nevis	1952
Guyana	1953
México	1953 (Desde 1947 en elecciones municipales)
Belice	1954
Colombia	1954
Honduras	1955
Nicaragua	1955
Perú	1955
Bahamas	1961
Paraguay	1961

*25 países antes que México.

Fuente: Participación, Liderazgo y Género en América Latina y El Caribe. Comisión Económica para América Latina y El Caribe. 1999.

Esta fase se sucedió en el marco de la época de hegemonía clásica del Partido Revolucionario Institucional (PRI), caracterizada por el fuerte control centralizado de las instituciones del Estado, no exento de consenso y de aceptación consciente en el cuerpo de la sociedad mexicana porque gobernaba también el “mundo de las ideas y de las costumbres” (Woldemberg, Salazar y Becerra, 2011: 16).

En este periodo las reglas electorales no constituían la parte medular de ese régimen político, pero creaban una eficiente barrera de contención que protegía su funcionamiento. (Woldemberg, Salazar y Becerra, 2011: 21). Los órganos electorales eran un brazo del partido en el poder y del gobierno, sin autonomía alguna, por lo que constituían los operadores del continuismo por los medios necesarios.

- 2. Las legislaturas de 1971 a 1989

La segunda corresponde al arranque del proceso de liberalización política, particularmente tras los sucesos de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, en 1968; a partir de la cual el país despertó del letargo estabilizador de la posguerra, iniciándose la llamada transición a la democracia. El tema de fondo de este movimiento es el de una sociedad modernizada que ya no cabía, ni quería hacerlo, en el formato político de partido hegemónico. México ya era más diverso, complejo y plural y un solo partido ya no podía representar todos los intereses, proyectos y pulsiones de un país que se modernizaba aceleradamente (Aguilar, 1993), abriendo también una oportunidad para el debate feminista en el movimiento social por las libertades de las mujeres.

En este periodo se dan dos reformas políticas importantes en los años 1978 y 1986. La primera habría de ser la de mayor calado. Esta reforma fue también la respuesta a otro evento que puso en alerta máxima al *statu quo*: el Partido Acción Nacional, único que podía presentar un candidato alternativo en la elección presidencial de 1976, no lo hizo a causa de una división interna y, por tanto, el Partido Revolucionario Institucional llegó solo a una elección plebiscitaria en la que todos los votos se emitieron en su favor. Ni las reglas electorales, ni el aparato estatal pudieron evitar que se evidenciara en toda su crudeza la falta de un sistema de partidos. El Partido Comunista estaba proscrito y otras fuerzas emergentes actuaban al margen de la ley ante los candados para participar en el marco de ésta.

Entonces, dos fueron los fines de las reformas político-electorales de aquel momento en México: primero, la consolidación y el desarrollo nacional de los partidos políticos; y, segundo, la creación de leyes e instituciones reguladoras de su competencia (Woldemberg, Salazar y Becerra, 2011: 31).

En un marco mayor, y de acuerdo con Girón, González y Jiménez (2008) tres situaciones impactaron en germen la naciente incorporación de las mujeres a las cámaras: una de ellas fue la modificación del estatus legal de los partidos de izquierda a partir de su reconocimiento; otra, la promulgación en 1977 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) que planteó la existencia de diputaciones y senadurías plurinominales al dar entrada a partidos pequeños y, por su vía, a mujeres que no militaban en el PRI.

- 3. Las legislaturas de la década de los noventa al año 2000

El tercer momento coincide con una influencia externa que provino de los acuerdos de Beijing (1995) que plantearon la necesidad de políticas de acción afirmativa (cuotas) para impulsar la participación de las mujeres en política y el despegue de la competencia política entre nuevos partidos y condiciones de pluralidad a nivel de municipios y entidades hasta culminar con la primera alternancia en el cargo ejecutivo nacional en el año 2000.

En este periodo, tras la cuestionada elección de 1988, se creó el Instituto Federal Electoral, manteniéndose en un primer momento la presidencia del organismo a cargo del Secretario de Gobernación, como representante del Poder Ejecutivo, situación que cambiaría en 1996 en que se estableció un modelo completamente ciudadanizado de dirección⁵ acompañado de nuevas reglas y procedimientos electorales a cargo del ya para entonces experimentado cuerpo de funcionarios profesionalizados bajo la actuación de los principios de certeza, equidad, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Asimismo, el Tribunal Federal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación como impartidor de justicia electoral con efectos definitivos e inatacables bajo la llamada Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre los cuales se establece el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, que habría de evolucionar a fuerza de criterios jurisprudenciales hasta ser considerado un verdadero amparo tutelar de derechos político electorales de las mujeres.

⁵ La creación del Instituto Federal Electoral fue concebido con un formato de autoridad electoral parcialmente ciudadanizado con un Consejo General que haría las veces de máximo órgano de dirección integrado por consejeros electorales provenientes de la academia y la sociedad civil presidido por un representante del poder ejecutivo en la persona del Secretario de Gobernación. El último fue Emilio Chuayffet Chemor.

Ya desde 1993, un grupo de diputadas y senadoras lograron plasmar una primera acción afirmativa en el artículo 173, inciso 3 del COFIPE, que quedaría redactada de la siguiente forma “Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular”. Ello permitiría un avance legislativo más para 1996, al establecerse redes interpartidarias entre diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias, que empujaron para establecer, a modo de recomendación, un máximo de 70 por ciento de representación política para cualquiera de los géneros. Esto quedó en la fracción XXII transitoria del artículo 1 del COFIPE.

La reforma no fue bien recibida del todo inclusive por las propias mujeres, ya que no se estipuló la forma en que los partidos debían garantizar el 70 sobre el 30 por ciento, y al no existir reglamentación para su cabal cumplimiento se dejaba en libertad a esos institutos políticos y al grado de conciencia adquirido por sus militantes y directivos para aplicar dicho ordenamiento (ver Hernández, 2000, citada en Peschard, 2003: 45).

El efecto que tuvo esta regla de corte “transitorio permanente” al interior del órgano administrativo electoral -el otrora IFE-, fue mejor analizado por Jacqueline Peschard que por el resto (Peña, 2003); ella, la única mujer representada hasta entonces en el Consejo General, fijó una posición crítica ante ésta al hacer visible una realidad que posteriormente tendría que cambiar:

[... La cuota] no significa que las mujeres vayan a llegar a ocupar una curul en el Congreso de la Unión, porque el resultado es que las candidaturas de mujeres viables son escasas y los partidos equilibran la cuota, con un mayor número de mujeres como suplentes o en los últimos lugares de la lista de representación proporcional. Ahí el IFE nada puede hacer (p. 46).

Y las elecciones de los años 1997 y 2000 así lo dejaron ver (ver cuadro 2).

- 4. Las legislaturas de 2003 a 2012

Para 2002, en el cuarto momento de los señalados, se aprobó la reforma que habría de estipular de manera obligatoria las cuotas de género para que en candidaturas a diputaciones y senadurías no se registrara más del 70 por ciento de un mismo sexo, incorporándola al cuerpo del COFIPE en los artículos 175, 175 A, 175 B y 175 C. La reforma estableció que las listas de representación proporcional de las diputaciones se

integrarían por segmentos de tres candidaturas, y que en los tres primeros segmentos de cada lista habría una candidatura de género distinto. A esta reforma sí se le pusieron dientes, estipulándose que a aquellos partidos o coaliciones que incumplieran con las nuevas disposiciones se les impondría un apercibimiento y, en caso de reincidencia, la negativa de registro de las candidaturas correspondientes.

Sin embargo, también se estableció una previsión que constituyó la puerta de escape para su cabal cumplimiento, una excepción a la cuota para el caso de las candidaturas de mayoría relativa cuando fueran resultado de un proceso de elección mediante voto directo, “compensando” a las mujeres relegadas con las suplencias o con espacios perdedores en las listas de representación proporcional.

Ahora bien, no obstante que la medida permitió un incremento en la presencia de mujeres en los órganos de representación política federal, ésta no fue significativamente elevada en la elección del año 2003 (cuadro 2); sin embargo, permitió que en las entidades federativas se iniciaran procesos de armonización en las respectivas legislaciones electorales y paulatinamente se incorporaran también las cuotas a los ordenamientos estatales poniendo el debate en el menú de las fuerzas y actores políticos locales, pero también en la mesa de los movimientos de mujeres de esos ámbitos.

De acuerdo con Peña (2003) durante esos años los avances obtenidos en materia de derechos políticos de las mujeres no fueron resultado de una estrategia concertada ni tuvieron un impacto cuantitativo destacable. No obstante, los Acuerdos del Consejo General del Instituto Federal Electoral como del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fueron importantes recursos para garantizar el cumplimiento de la acción afirmativa.

En 2003, también se cumplieron los primeros 50 años del sufragio femenino, lo cual suscitó una profunda reflexión sobre el periodo transcurrido y los exiguos logros alcanzados en la representación de las mujeres la cual favoreció la movilización desde la academia y la sociedad civil para demandar mejores garantías de participación política en los partidos, así

como otras exigencias relacionadas con la conciliación del trabajo y la vida familiar y el derecho a la no violencia y a la discriminación en todas sus formas.⁶

En la reforma aprobada tras las competidas elecciones de 2006, en los años 2007-2008 también se incluyeron cambios a las cuotas de género avanzando hacia un horizonte paritario, al aprobarse que pasara de 70 a 60 por ciento el máximo de candidaturas de un sexo en diputados y senadores en el COFIPE.⁷

Otro aspecto relevante de la reforma fue la disposición relativa al financiamiento público de los partidos políticos, para que destinaran el 2% del gasto ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres promovida como medida afirmativa para combatir el lugar común al que se recurría para no postular mujeres aduciendo que no había perfiles preparados para la toma de decisiones que la función pública requiere.⁸

En ese marco, en agosto de 2007, una mujer, María del Carmen Alaníz Figueroa, llegó por primera vez a la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), impulsando desde el primer momento criterios para juzgar con perspectiva de género que hasta entonces no existían.⁹ La llegada de Alaníz influyó también en el proceso de incorporación de otras figuras femeninas a las magistraturas de las salas regionales y tribunales locales del país, consolidando una corriente garantista en favor de los derechos

⁶ El 11 de junio de 2003, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) introduciendo al orden jurídico nacional disposiciones que tienen la finalidad de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación en contra cualquier persona y de promover la igualdad de oportunidades y de trato.

⁷ La nueva regla en la reforma 2007-2008 se dispone en el artículo 219 del COFIPE conforme lo siguiente:

1. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
2. Quedan exceptuadas de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

Artículo 220

1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas de género distinto, de manera alternada.

⁸ Y aun cuando algunos partidos políticos lejos de entender su significado en un primer momento lo ejercieron contratando cursos, conferencias o talleres con temáticas como: “menopausia”, “dietas”, “recetas caseras” y “tratamientos para el cabello”, la medida permitió visibilizar a las mujeres y potenciar sus posibilidades de acceso a la representación política (Pérez y Ramos, 2017).

⁹ En diciembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia presentó el Primer Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf

político-electorales de las mujeres. Para el año 2017 la integración de la Sala Superior, Sala Especializada y salas regionales, es la siguiente:

Cuadro 5. Integración de la Sala Superior, Sala Especializada y salas regionales del TEPJF, 2017

Sala	Magistradas	Magistrados
Sala Superior	2	5
Sala Regional Especializada	2	1
Sala Regional Guadalajara	1	2
Sala Regional Monterrey	1	2
Sala Regional Cd de México	1	2
Sala Regional Toluca	1	2
Sala Regional Xalapa	0	3
TOTAL: 25 (100%)	8 (32%)	17 (68%)

Fuente: Portal del TEPJF, www.te.gob.mx

Nota: de las 7 presidencias, 4 las detentan mujeres y 3 hombres.

Las reformas del 10 de junio de 2011 permitieron elevar a rango constitucional los derechos humanos, y como obligación de las autoridades el respetarlos y promoverlos en un marco de igualdad y no discriminación, basados en el principio *pro personae* y con pleno respeto a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

El impacto de esta reforma también se dejó sentir en la actuación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales frente a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y de mujeres de diversos partidos políticos, que cada vez más alertas y conscientes de la ampliación del marco de derechos adquiridos desde el contexto internacional, se aprestaron a ejercerlos con mayor determinación.

Tal fue el caso de activistas del colectivo Red Mujeres en Plural, como Clara Scherer, escritora; Silvia Hernández, ex senadora, y otras integrantes destacadas que acompañaron la promoción del emblemático juicio para la protección de los derechos político electorales, SUP-JDC-12624/2011 entablado el año previo a la elección de 2012¹⁰, en contra de los

¹⁰ Las promoventes fueron María Elena Chapa Hernández, María de las Nieves García Fernández, María Cruz García Sánchez, Refugio Esther Morales Pérez, Rocío Lourdes Reyes Willie, María Fernanda Rodríguez Calva, María Juana Soto Santana, Martha Angélica Tagle Martínez, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara en contra del acuerdo CG327/2011, "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012".

criterios aprobados reiteradamente desde 2003 por el otrora IFE, para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección, en los que se convalidaba la excepción a la cuota de género en candidaturas cuando fueran resultado de “procesos democráticos” y contemplaban que los partidos debían “procurar” que la fórmula completa (propietario y suplente) fuera del mismo sexo.¹¹

La sentencia emitida fue calificada de histórica porque resolvió que dicha excepción constituía un exceso de las facultades reglamentarias conferidas al IFE y, por tanto, los partidos que para la fecha en que se pronunció ya habían registrado sus candidaturas, tuvieron que rehacer los registros de mayoría relativa que no cumplían con el 60/40 para ajustarse a ello; pero además porque se estableció imperativamente que las suplencias por ambos principios deberían ser del mismo sexo, terminado con el efecto “juanitas” que en abierto fraude a la ley realizaron algunos partidos políticos en el proceso electoral 2009.

Con ello, el TEPJF abrió una nueva forma de actuación de los órganos electorales al introducir regulaciones que permitieron la intervención de éstos sobre la vida interna de los partidos; además, “dio paso a la tesis de identidad política: los partidos deben ser democráticos como debe serlo el régimen político” (Medina y Reynoso, 2017: 212).

- 5. Las reformas de 2014 en adelante

El ciclo de gobernanza de esta quinta fase que revisamos se abrió con las reformas electorales iniciadas en 2013, que se gestaron en un contexto político de alianzas entre los tres principales partidos del país (necesarias para la legitimidad de la cuestionada presidencia naciente) en torno al denominado Pacto por México que impulsó un conjunto de reformas llamadas estructurales sobre ámbitos diversos: energética, educativa, político–electoral, en telecomunicaciones, financiera, hacendaria y laboral.

Aun cuando se dice que, al no ser de Estado, la reforma político electoral quedó corta, la determinación que elevó a rango constitucional la paridad en las cámaras federales y

¹¹ El criterio décimo tercero de dicho acuerdo interpretaba sin sustento lo que debía entenderse por procedimiento democrático, siendo aquel “en el que la elección de las candidaturas se realice de forma directa por la militancia del partido o por la ciudadanía, o de forma indirecta a través de una convención o asamblea en que participe un número importante de delegados electos *ex profeso* por dicha militancia”.

locales, consistente en que 50 por ciento de las candidaturas a diputados y senadores fueran para mujeres y el otro 50 para hombres, es uno de los aspectos considerados más positivos de la misma (*cfr.* Rocha, 2013).¹²

El impacto de la medida fue importante al producirse un incremento de 28 diputadas más por la vía de mayoría relativa en la representación en la Cámara de Diputados para dejarla en 42.6 por ciento; aun así, fue menor el resultado al crecimiento observado entre 2009 y 2012 debido, se señala, a “la cuota de candidaturas para mujeres en 2011, que pasó de 30/70 a 40/60 y a [los efectos favorables de la mencionada resolución 12624 del TEPJF] que sancionaba ejemplarmente a los partidos que incumplieran con ella” (Castellanos, 2016: 101-102).

En ese sentido y sin desestimar lo alcanzado en lo federal, quizá los efectos prácticos y simbólicos mayores de la reforma estuvieron más en los estados y en lo que desató en las demandas y la imaginación política a propósito de hacerla extensiva a los ayuntamientos¹³ y a otros niveles de gobierno, a las propias instancias administrativas de lo electoral¹⁴ y hasta la administración pública federal y estatal.

Por otro lado, también ha ampliado la mira de las demandas al llevar a concluir, después de su aplicación, que la paridad en las candidaturas no conlleva *per se* equidad en la participación; y, en ese sentido será necesario seguir pugnando por su legitimación impulsando medidas para alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres con los hombres en el espacio público.

Esto se observa claramente en las gubernaturas y los aparatos judiciales, inclusive en la integración del Consejo General del propio INE, los que a pesar de todo, persisten todavía como pendiente de la paridad del régimen político electoral.

¹² Entre los aspectos negativos se señala que se perdió la oportunidad de hacer una necesaria reforma de Estado; que, encadenada a la reforma energética, se realizó con poca discusión y consenso; no se introdujo la revocación de mandato que fungiría como contrapeso a la reelección, ni la segunda vuelta; y, en resumen, “las modificaciones legales al sistema político [fueron] estructuralmente insuficientes” (Rocha, 2013: 103-104).

¹³ En el caso de los ayuntamientos, la reforma fue omisa en hacerse cargo de la aplicación de la paridad de género por lo que en los procesos de armonización legislativa en las entidades, las legislaturas la adoptan solo en sentido vertical; sin embargo, poco a poco a fuerza de sentencias se fue imponiendo de manera horizontal.

¹⁴ Por lo que ve a la integración de los organismos electorales locales, a partir de la reforma de 2014 son designados por el Consejo General en procesos de selección bajo el principio de paridad.

Por otra parte, respecto de lo señalado por Medina y Reynoso (2017), es de observar la actuación del TEPJF durante el proceso electoral de 2015 en el que sostuvo una línea interpretativa en la etapa de registro de candidaturas que modificó sustancialmente en la etapa de resultados, en particular respecto a la asignación de los escaños de representación proporcional, lo cual constituye una expresión de las tensiones que ha implicado un marco de derechos expansivo para el acceso de las mujeres a espacios legislativos.

En la fase de registro los tribunales emitieron sentencias que determinaron que no podían postularse mujeres solo en distritos perdedores (SM-JDC-287/2015, SUP-REC-115/2015, SM-JDC-19/2015, SUP-REC-39/2015) y, en torno a las alcaldías, se amplió el concepto de paridad para extenderlo a todos los espacios dando paso a la noción de paridad horizontal (SX-JRC-79/2015, ST-JDC-234/2015, SUP-REC-97/2015).

Sin embargo, en la etapa de revisión de resultados la Sala Superior dio un revés a esas determinaciones mediante las sentencias referentes a la integración del Congreso de Morelos (SUP-JRC-680/2015), la Cámara de Diputados federal y el Congreso de Sonora (SG-JDC-11346/2015) que echaron atrás la resolución de modificar las listas de los partidos para lograr la integración paritaria de esos órganos. Con ello el Tribunal se apartó de la consideración del principio de sub representación histórica de las mujeres y el de paridad como ejes rectores de sus determinaciones, para reintroducir el principio de auto organización de los partidos políticos (Medina y Reynoso, 2017: 213-214).

La reciente llegada de dos nuevas magistradas a la Sala Superior, una de ellas como Presidenta, -aún en minoría-, así como la nueva integración de magistraturas nos hace esperar que reorientarán la postura en favor de lograr una mayor capacidad de incidencia de las mujeres en la toma de decisiones de los partidos como es el caso de la reciente sentencia expediente SUP-JDC-369/2017 y acumulados en la que la Sala establece que el principio de paridad de género, no se agota cuando los partidos políticos postulan sus candidatos a los cargos de elección popular, sino que, además, el mismo trasciende hacia la conformación de sus órganos internos, ordenando al Partido del Trabajo que en la elección de las y los integrantes de los órganos directivos de dicho partido, se garantizara la paridad de géneros.

Por otra parte, un fenómeno que adquirió notoriedad a partir de la reforma de 2014 fue el de la violencia política de género (es verdad que ha acompañado los esfuerzos de las mujeres por hacer política, pero adquirió esta denominación y su reconocimiento de forma tardía¹⁵). Es lamentablemente lógico que si la violencia contra las mujeres se venía manifestando en todos los espacios de la sociedad, cuando comenzó a crecer la participación política de ellas¹⁶ y accedieron a más espacios de representación, se fue incrementando también el número y se diversificaron las formas de obstaculización violenta de su presencia en esa arena, así como los actores que la ejercen: partidos políticos, medios de comunicación (para casos específicos ver Cerva, 2017), instituciones públicas, funcionariado, entre otros. Es así que, según reportó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos electorales (FEPADE), para el periodo de 2013-2016 se encontraron 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) que podrían constituir violencia política de género. De éstos, más de la mitad (53.1%) sucedieron en 2016. A pesar de ello, a la fecha la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género. El proceso comenzó en 2012 en el Senado y se aprobó este 2017 enviar a la Cámara de Diputados federal la iniciativa para hacerlo, ahí quedó junto a otras siete iniciativas para tratar de tipificar la violencia política de género antes del proceso electoral 2018.

Conclusiones

En el camino democrático hacia la inclusión de las mujeres en la vida pública mediante la paridad en México es posible observar que dos actores han sido en gran medida el motor principal de los cambios normativos que han dado apertura a cada ciclo de gobernanza electoral: la diversidad de mujeres (políticas, académicas, activistas, comerciantes, profesionistas, empresarias, indígenas, y comunidad LGBTTTQI -sin omitir algunos aliados

¹⁵ La ACOBOL (Asociación de Concejalas de Bolivia) pergeñó los conceptos de acoso político y violencia política frente a “las evidencias claras de diversas experiencias de violencia ejercida contra las mujeres en las alcaldías municipales” y fue hasta 2012 que lograron la promulgación de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres (Barrera y Cárdenas, 2016: 22-23).

¹⁶ Por ejemplo, el número de alcaldesas casi se triplicó en 10 años, al pasar de 3.5 por ciento en 2005 a 9.1 por ciento en 2015.

varones dispuestos a reconocer la igualdad de su estatura frente a ellas) y los partidos políticos.

Sobre mujeres y partidos recorre una tensión dinámica que llevó al diseño de reglas, su aplicación en procesos, el planteamiento y adjudicación de disputas y la revisión regional a fin de que se fueran abriendo espacios a las primeras para su participación en la vida política del país y alcanzar así objetivos necesarios de inclusión de la democracia.

Al hablar de dichos actores tenemos que referirnos al contexto de su actuación: el que nos remite al régimen autoritario en el que las mujeres mexicanas alcanzan de manera primigenia el estatus universal de ciudadanía en 1953, disponiéndose a ejercerla en el primero y segundo ciclos analizados (1955 a 1980), y hallando que más que un reconocimiento que asegurara su acceso -potenciando su inclusión-, se adoptó sin considerar seriamente la posibilidad de que pudieran disputar los espacios de poder político, lo cual hizo en la práctica nulo su avance.

Sin embargo, hacia el tercer ciclo, la situación del país había cambiado y las oportunidades para ensanchar los canales de participación a través de un espectro más plural y diversificado de partidos y organizaciones políticas favorecería un ambiente de diálogo y exigencia sobre las agendas feministas y la proyección de los liderazgos de mujeres en éstos, así como en la emergente sociedad civil.

En este nuevo contexto se dan las primeras reformas con perspectiva de género en materia político electoral, en los años 1993 y 1996, con las cuales todavía de manera incipiente y tímida se inicia la ruta de las cuotas de género como medidas afirmativas de carácter temporal, a fin de superar la histórica sub representación de las mujeres derivada de las asignaciones culturales de género, si bien todavía de manera insuficiente.

Como se ha señalado, el desarrollo político del país había marchado por una prolongada transición hacia la democracia y para entonces se encontraba en vías de consolidación: contaba ya con un sistema de partidos y un sistema electoral que garantizaban la equidad en la pluralidad y el principio de incertidumbre democrática ante los comicios celebrados periódica e ininterrumpidamente, alcanzando su primera alternancia en el año 2000.

Desde la primera hasta la tercera fase propuestas, se gestan sobre todo en el diseño de reglas las condiciones de apertura para el acceso público de las mujeres al espacio de representación; en ocasiones incluso de forma indirecta como en el caso de la creación de la

figura de diputaciones y regidurías plurinominales o la creación de una instancia electoral paulatinamente ciudadanizada.

Las condiciones de la alternancia llevaron otra vez a la posibilidad de examinar la situación sobre la participación política de las mujeres en una siguiente reforma aprobada en el año 2002 con lo cual se abrió el cuarto ciclo de gobernanza electoral, en el que se logró aplicar de manera obligatoria un nuevo marco regulatorio de cuota de género que habría de avanzar hacia un horizonte paritario en la siguiente reforma en el año 2007-2008, que es acompañada de reglas complementarias en materia de financiamiento público, mediante las cuales se obligó a los partidos políticos a destinar el 2% de su gasto ordinario, para el empoderamiento y el desarrollo de los liderazgos de las mujeres con el fin de evitar que en lo sucesivo los partidos políticos adujeran que no había féminas a quien postular, monto que para la reforma política en que se establece la regla de paridad en candidaturas del año 2014, se incrementa a 3% y en algunas entidades llega hasta 6%.

Este ciclo está marcado por un mayor involucramiento de las autoridades electorales, tanto las administrativas como jurisdiccionales, en la vigilancia del ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres, inclusive se podría hablar de activismo, derivado de las condiciones que el proceso democratizador y el estado constitucional de derecho han propiciado.

En la cuarta y quinta fase se observa con mayor claridad el ciclo de gobernanza en tanto las reglas se afinan por la vía de las medidas de acción afirmativa primero y la paridad después, cuyo impacto alcanza a los propios órganos administrativos y jurisdiccionales electorales.

En clave de gobernanza electoral podemos decir que el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en 1953 inicia una gran época que atraviesa las etapas propuestas y se cierra con la llegada de la paridad (vertical, horizontal y transversal) ya que, de acuerdo con Peña (2014), esta última tiene un carácter fundacional de la misma magnitud que aquella.

La reforma político-electoral que incluyó el principio de igualdad sustantiva en el texto Constitucional y en las leyes secundarias tiene un significado histórico, sólo comparable con la conquista del derecho al sufragio femenino en México, a mediados del siglo XX (1953). Reconocer como un derecho ciudadano y una obligación de los partidos la postulación paritaria a cargos de elección popular, significa ampliar la base de representación social; además de ser un cambio en la noción de comunidad política; podría incluso calificarse como el advenimiento de un nuevo 'contrato social' que hay que honrar y proteger (pp. 61-62).

Hoy la paridad aún tiene ante sí diversos desafíos como lo es el de enfrentar los efectos no deseados de la violencia política que se ha suscitado ante la pérdida de espacios de poder en tanto se mantenga la visión tradicional patriarcal y patrimonialista del ejercicio del poder político. Pasadas las elecciones de 2018 es probable que se reabra un nuevo ciclo con el diseño de reglas que recojan los pendientes y ajustes de la paridad y que abran así una nueva época. Para ello es de anticipar que habrá voces que pugnen por incorporar en la reforma medidas que afinen aún más el camino hacia una igualdad sustantiva; entre ellas, prevenir con mayor eficacia la violencia política de género, transparentar y manejar con perspectiva de género el financiamiento público y privado, así como la distribución de prerrogativas (entre ellas el acceso a medios de comunicación).

Referencias bibliográficas

- AGUILAR VILLANUEVA, Luis F. 2016. *Democracia, gobernabilidad y gobernanza*. México, INE, Conferencias magistrales, Temas de la Democracia.
- BARRERA BASSOLS, Dalia y Georgina Cárdenas Acosta. 2016. "Presidentas municipales en México: acoso y violencia política (2010-2016)", *Politai: Revista de Ciencia Política*, vol. 7, núm. 12, Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 15-34.
- CARBONELL, José y Miguel. 2010. *La construcción de la igualdad de género: Estado de bienestar y políticas públicas*. México, IJ - UNAM /CONAPRED.
- CASTELLANOS CERECEDA, Roberto. 2016. *La reforma político-electoral de 2014. Diagnósticos, primeros resultados y principales desafíos*. Serie Reformas estructurales: avances y desafíos, México, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez.
- CERVA CERNA, Daniela. 2017. "Medios de comunicación y violencia política hacia mujeres: continuidades y transformaciones en el proceso electoral de 2012 y 2015", *Revista Iberoamericana de Comunicación*, núm. 32, primavera-verano, México, Universidad Iberoamericana, pp. 37-80.
- DEL CAMPO, Susana Bruna. 2007. "La paridad en situación de democracia y gobernanza", XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Guadalajara, ALAS.
- FERNÁNDEZ ACEVES, María Teresa. 2017. "Política y ciudadanía: el liderazgo de María Guadalupe Urzúa en la Confederación Nacional Campesina, 1953-1957", *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, núm. 149, invierno, México, El Colegio de Michoacán, pp. 71-100.
- FLORES, Julia. 2011. "Cincuenta años de la cultura política en México", en Julia I. Flores Dávila. *A 50 años de la cultura cívica. Pensamientos y reflexiones en honor al profesor Sidney Verba*. México, UNAM/TEPJF.
- GILAS, Karolina M. 2016. "El nuevo modelo de gobernanza electoral: un cambio desatinado", *Revista Mexicana de Derecho Electoral*, núm. 10, julio-diciembre, México, UNAM-III, pp. 125-141.
- GIRÓN, Alicia, María Luisa González Marín y Ana Victoria Jiménez. 2008. "Breve historia de la participación política de las mujeres en México", en María Luisa González Marín y Patricia Rodríguez López (coords.) *Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD*. México, UNAM/UAM/Miguel Ángel Porrúa/Inmujeres.
- MEDINA TORRES, Luis Eduardo y José Reynoso Núñez. 2017. "Del principio de sub-representación histórica al principio de auto-organización de los partidos políticos", en Griselda Beatriz Rangel Juárez y María Rosas Palacios (coords.) *Elecciones y paridad de género. Jalisco 2015*. México, SOME.
- MEDINA TORRES, Luis Eduardo. 2016. *Gobernanza y régimen electoral en la reforma política de 2014*. México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- MÉNDEZ DE HOYOS, Irma. 2006. *Transición a la democracia en México. Competencia partidista y reformas electorales 1977-2003*. México, Flacso/Fontamara.
- MOZAFFAR, Shaheen y Andreas Schedler. 2002. "The Comparative Study of Electoral Governance: Introduction", *International Political Science Review*, vol 23, núm. 1, enero, pp. 5-27.

- PEÑA MOLINA, Blanca Olivia. 2014. “La paridad de género: eje de la reforma político-electoral en México”, *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, núm. 14, México, SOME, pp. 31-74
- _____. 2003. “La cuota de género en la legislación electoral mexicana: ¿igualdad de oportunidades o igualdad de resultados?”, *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, núm. 2, julio-diciembre, México, SOME, pp. 35-58.
- PÉREZ CARDIEL, Marcelino y Guadalupe Ramos Ponce “Presupuesto partidista y liderazgo político de las mujeres”, en Griselda Beatriz Rangel Juárez y María Rosas Palacios (coords.) *Elecciones y paridad de género. Jalisco 2015*. México, SOME.
- PESCHARD MARISCAL, Jacqueline. 2003. “Medio siglo de participación política de la mujer en México”, *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, julio-diciembre, México, SOME, pp. 13-34.
- ROCHA QUINTERO, Jorge Enrique. 2013. “El primer año de Enrique Peña Nieto: continuidad económica y restauración autoritaria”, *Análisis Plural*, segundo semestre, Tlaquepaque, ITESO, pp. 99-109.
- TEPJF. 2014. *Democracia igualitaria. Criterios jurisprudenciales para la equidad de género e inclusión de comunidades indígenas*. México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- WOLDEMBERG, José, Pedro Salazar y Ricardo Becerra. 2011. *La mecánica del cambio político en México*. México, Ediciones Cal y Arena.
- ZAREMBERG, Gisela. 2010. *Mujeres, votos y asistencia social en el México priista y la Argentina peronista*. México: Flacso.